Bartolomé Clavero

*Foros y rabassas.
Los censos agrarios
ante la revolución española*

Primera parte

La enfiteusis desapareció, al redactarse el Código Napoleón, barrida por el huracán revolucionario. ¿Y por qué murió, en aras de la revolución, una institución de progenie tan ilustre y de historia tan preclara?... ¿Qué tiene que ver la enfiteusis con el feudo?

M. Alonso Martínez (1883)

Los foros y cualesquiera otros gravámenes de naturaleza análoga que se establezcan..., por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas para el censo enfitéutico.

Código Civil (1889)

Hoy, por fortuna, no existe el feudalismo; los principios de 1789 acabaron con él en toda Europa y esos mismos principios son los que dominan en la actualidad. ¿Por qué, no obstante, muchos e importantes Códigos modernos han prohijado el censo enfitéutico?

Arturo Corbella (1892)

Recapitulando sobre el tema de la desamortización, ha podido escribir Giralt que una de las «lagunas más importantes en el conocimiento de la obra desamortizadora» es

la del «problema de la redención de los censos» (1); ciertamente, y algo más: no sólo viene la investigación descuidando este problema estricto, sino también la cuestión previa más general de la misma subsistencia en España de los censos —rentas irredimibles— tras la revolución iusliberal o burguesa, subsistencia que había de plantear dicho problema de la redención en el momento de la desamortización. Como podrá decirse desde la conciencia regeneracionista —y como tal un tanto exagerada— fin de siglo: «no hay país en el mundo donde existan pensiones irredimibles, sólo España ofrece este lamentable espectáculo»; «toda heredad gravada con censos no está enteramente desamortizada»; «el foro ha sido, no un contrato libre, sino una función puramente señorial que el Estado debe reparar porque así lo exigen, no sólo los intereses del colono, sino el moderno concepto de la propiedad territorial»... (2).

El tema no resulta, desde luego, desconocido: constituye notoriamente una de las cuestiones sociales más conflictivas de algunas regiones españolas —*foros* en Galicia, *rabassas* en Cataluña...— hasta mediado el presente siglo. Pero es una cuestión que ha centrado la atención de los investigadores en los momentos finales del sistema señorial o feudal donde surgió y se desarrolló (3), o que la ha dirigido hacia sus últimas fases más cercanas (4), quedán-

(1) Emilio Giralt, «Desamortizaciones, transferencias de propiedad y transformaciones agrarias en la época contemporánea», pág. 33, en *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las ciencias históricas* (1973), IV, Santiago de Compostela 1975, págs. 33-36. La insuficiencia de la investigación sobre censos ya podía destacarla el mismo autor en «Los estudios de historia agraria en España desde 1940 a 1961. Orientaciones bibliográficas», págs. XXXVII, LIII y LVI, en *Índice Histórico Español*, V, 1959, págs. IX-LXXIX, pero, y ello era significativo como veremos, sólo como cuestión de carácter meramente regional.

(2) Véanse estas expresiones (en realidad de 1908) en J. A. Durán, *Agrarismo y movilización campesina en el País Gallego, 1875-1912*, Madrid 1977, págs. 287, 290 y 326. Y habremos de confrontarlas al final de nuestro estudio.

(3) Para los casos catalán y astur-gallego que aquí fundamental, aunque no exclusivamente, habrán de interesarnos, véase en especial la nota 16.

(4) Especialmente, E. Giralt, «El conflicto rabassaire y la cuestión agraria en Cataluña hasta 1936», en *Revista de Trabajo*, 7, 1965, págs. 51-72; Albert Balcells, *El problema agrario a Catalunya, 1890-1936. La qüestió rabassaire*, Barcelona, 1968; J. A. Durán, *Agrarismo y movilización campesina*, cit., quien además anuncia otro estudio sobre *El problema de la propiedad de la tierra en la Galicia de la Restauración, 1900-1923*, de cuya publicación no tengo noticia.

dose en la sombra, entre unas y otras postrimerías, el período que presenció una revolución abolitiva de instituciones señoriales —una *revolución iusliberal*— respetando ésta de los censos (5), el período que, por ello, precisamente habrá de plantear el problema fundamental de dicha subsistencia. El presente estudio intenta enfrentarse con esta cuestión: cómo la misma pudo producirse y de qué forma y con qué alcance esta institución de los censos se incardina en el nuevo sistema ya no señorial generado por dicha revolución.

LOS CENSOS ANTES DE LA REVOLUCION

¿Qué es un censo?

Foros, rabassas, censos al quitar, pensiones, cánones, tributos, treudos, censales, fetosines, derechuras, establecimientos, mamposturas..., toda una serie, más bien heterogénea, de conceptos rediticios aparecen generalmente dentro del capítulo de los censos, considerados conjuntamente, en la época final del sistema señorial, a la caída del siglo XVIII y entrada del XIX. ¿A qué venía esta especie de mescolanza? ¿Por qué se debate como un solo problema la razón de la existencia de esta variedad de rentas,

(5) Puede comprobarse últimamente en Josep Fontana, *La revolución liberal. Política y Hacienda, 1833-1845*, Madrid 1977; Carlos Marichal, *Spain, 1834-1844. A New Society*, Londres 1977; Miguel Artola, *Antiguo Régimen y Revolución Liberal*, Barcelona 1978; representando el segundo la posición más extrema, pero también más común: nuestro tema no merece consideración; y arrastrándose en las otras imprecisiones y confusiones en la materia, en la escasa medida que se considera, que habremos por nuestra parte ulteriormente de confrontar. Para estudios que no se ocupan del capítulo de los censos en la revolución liberal: Salvador de Moxó, *La disolución del régimen señorial en España*, Madrid 1965; Gonzalo Anes, *La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas*, en Pedro Schwartz (ed.), *Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX*, Madrid 1970, págs. 235-263; Francisco Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona 1971; José Manuel Naredo, *La evolución de la agricultura en España. Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales*, Barcelona 1971, y Eduardo Sevilla-Guzmán, *La evolución del campesinado en España. Elementos para una sociología política del campesinado*, Barcelona 1979; desde diversos aspectos y especialidades, pero, como veremos, todos ellos concernidos, y nada marginalmente, en nuestra cuestión. Y véase nota 94.

e indiscriminadamente, por lo común, se legisla para ellas en el XIX? ¿Qué era, en sustancia, un censo? (6).

Si, buscándose respuesta a tal interrogante, se acude a algún diccionario jurídico de la época, ya se encontrará seguramente más confusión que claridad, y esto, incluso, reconocidamente: «siendo ésta una materia de las más escabrosas en el Derecho»; entre definiciones imprecisas (censo es un derecho, censo es un contrato...) y distinciones no bien delimitadas (el censo consignativo, la enfiteusis, la reserva de renta que no implica división del dominio...), probablemente sólo se obtendrá una idea medianamente segura: es término «propio de nuestra España» que denota «rédito anual» (7); *censo* significa simplemente «renta» (precisamente en otros países se llamaría específicamente *renta* lo que aquí «censo»); aparte de ello, lo único que en la materia «puede sostenerse con firmeza es... que el Derecho está embrollado», se nos dirá nuevamente al final del período que aquí vamos a considerar (8).

Censo equivale a renta, pero censo no equivale con propiedad a toda renta; existe un uso genérico que siempre puede aplicarse a toda clase de renta (no otra cosa ocurre entonces con otros términos como el de tributo), pero su acepción técnica se reserva a unas determinadas especies. Para delimitarlas, mejor será proceder por exclusión (9); en el orden tardofeudal, no se conceptúan estrictamente como censos las rentas derivadas de forma más directa de algún título señorial, rentas que, generalmente con identificación específica (desde una serie muy variopinta de dere-

(6) La perplejidad que sigue actualmente provocando el tema puede bien comprobarse en los mismos intentos fallidos por desbrozarlo de las citadas *I Jornadas de metodología* de Santiago de Compostela: vol. III, págs. 751-778.

(7) Andrés Cornejo, *Diccionario histórico y forense del Derecho Real de España*, Madrid 1979, pág. 121.

(8) Jacobo Gil, *De los censos según la legislación general de España*, Santiago de Compostela, 1880. Y ésta es la mejor guía que conozco, aunque no sin interpretaciones muy discutibles, para la legislación y jurisprudencia de censos; mejor en todo caso que las tradicionales historias (de 1892) de Arturo Corbella y Ramón Sánchez Ocaña.

(9) Como, hasta cierto punto, ya procedía J. Gil, *De los censos*, cit., págs. 7-9, señalando además confusiones en otras definiciones más directas, en lo que aquí nos entramos ahora.

chos sobre más el patrimonio que la persona de los vasallos, hasta alcabalas y otras exacciones definidas sobre el tráfico, o también hasta los diezmos y otras imposiciones sobre la producción...), proceden directamente de poderes precisos, jurisdiccionales o políticos, del señor, sea éste laico, incluido el mismo rey, o eclesiástico; tampoco se consideran estrictamente censos las rentas de los establecimientos agrarios menos estables, esto es, fundamentalmente, las que derivan de arrendamientos celebrados por corto tiempo, con independencia de que los mismos puedan renovarse reiteradamente. En una amplia zona que limita, a ambos extremos, con el privilegio señorial y con el derecho arrendaticio estrictos, podemos así encontrar técnicamente calificadas como censos una serie efectivamente heterogénea de rentas; calificadas como tales con independencia de su origen o constitución, o con relativa independencia según ahora veremos.

Los censos así realmente no definidos de una forma positiva pueden responder, efectivamente, a orígenes diversos o no enteramente homogéneos. Nos encontramos, en lo esencial, con dos supuestos. El primero, que se comprende comúnmente en la categoría de *censo enfiteutico*, hace referencia a establecimientos agrarios en tierras propias (las *rabassas* catalanas y los *foros* gallegos, entre ellos), esto es, a «arrendamientos» más estables y, por ello, con los efectos específicos de creación de derechos campesinos que luego diremos. El segundo, que se suele identificar con el término de *censo consignativo*, se refiere a operaciones tan distintas del caso anterior como las de imposición de capitales en tierras ajenas (y aquí los *censos al quitar* castellanos y navarros, entre otros), esto es, a un mecanismo análogo —también sólo análogo— al del actual préstamo hipotecario: se adquiere, mediante la prestación de un capital, un ingreso, respondiendo de todo ello —capital e «interés» o renta— un determinado bien de quien recibe el préstamo, pero aquí, y por imperativos institucionales contrarios al desarrollo del capital, se adquiere directamente la renta, una participación, junto a los derechos estrictamente señoriales y otras posibles rentas censuales de diverso origen, en una misma explotación

sometida a análogas condiciones de orden feudal (10). Y esta renta, por ello y pese a la diversidad de su supuesto, podrá ser igualmente censo en su mismo sentido jurídico o técnico; y así tenemos las dos especies fundamentales —*censo enfiteútico* o de origen agrario y *censo consignativo* o de origen crediticio— junto a las que aparecerá otra tercera, calificada como *censo reservativo*, que no es necesario considerar ahora por cuanto que, como ya veremos, su carácter es más adventicio, respondiendo a determinaciones menos estructurales (11).

Junto a los derechos más estrictamente señoriales, de menor entidad económica por lo común (salvo evidentemente alguno, como el diezmo eclesiástico), los censos son indudablemente las rentas más sustanciosas en aquellos territorios donde su uso impera sobre el del arrendamiento (a grandes rasgos, entre nosotros, la España levantina y septentrional, salvo parte del País Vasco); menos importantes, desde luego, allí donde el segundo prevalece (gran parte de Castilla, Extremadura y Andalucía, sobre todo), aunque aquí siempre puede también introducirse y difundirse por vía de imposición de capitales o adquisición directa de rentas mediante el referido censo consignativo; pero conviene no dejar de advertirse que esta segunda vía no da lugar al importante efecto de creación de derechos campesinos que ahora pasamos a considerar.

En el primer caso, los censos agrarios producen por regla general un efecto de división del dominio de la tierra con atribución de uno de los derechos dominicales resultantes —el inferior, evidentemente— a quien la recibe y, por tanto, si éste la cultiva efectivamente, a quien la trabaja. El trabajador que, en el orden feudal, cultiva una

(10) Para este presupuesto de la cuestión que, por habernos de ocupar finalmente los censos enfiteúticos, aquí no podemos tratar, puedo remitir a B. Clavero, «Prohibición de la usura y constitución de rentas», en *Moneda y Crédito*, 143, 1977, págs. 107-131, e *Interesse*, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, 49, 1979, págs. 39-97. E interesa a nuestros efectos Emiliano Fernández de Pinedo, *Actitudes del campesino parcelario propietario ante la usura y el crédito rural, siglos XVI a XVIII*, en Alfonso Otazu (ed.), *Dinero y Crédito (Siglos XVI al XIX)*, Madrid 1978, págs. 371-379.

(11) Se suele de otra parte discutir, tanto que el foro sea una «verdadera» enfiteusis o censo enfiteútico, como también, o bastante más, que lo sea la rabassa; pero no es necesario que aquí entremos en estas querellas: nuestro mismo estudio podrá luego mostrarnos a qué vinieron.

tierra bajo arrendamiento no adquiere generalmente derecho alguno sobre la misma (12), mientras que, como decimos, el trabajador que, en el mismo orden, lo hace bajo censo ve comúnmente reconocido un derecho a su favor: el llamado *dominio útil* que se subordina al derecho o derechos superiores —*dominio directo*— de los señores u otros rentistas. El dominio útil es un derecho real efectivo en cosa propia, aunque subordinado según decimos; entraña efectivas facultades de disposición y, en su caso —esto, sobre todo, según los plazos del establecimiento—, sucesión de la tierra, aunque limitadas y condicionadas. Su principal limitación ha de radicar en la circunstancia de que la tierra correrá siempre gravada y devaluada con la carga de sus rentas, con la carga de sus censos y derechos señoriales concurrentes; su principal condicionamiento ha de consistir en que los actos de disposición del campesino titular del dominio útil —o de sucesión también, en su caso— han de contar siempre con el derecho superior del dominio directo, con su intervención generalmente resuelta en nuevas imposiciones económicas a cada efecto; así, en el caso de enajenación, el directo tiene un derecho de tanteo a la misma adquisición, eliminando de esta forma el útil, o, de no ejercerlo, tiene igualmente el derecho a un impuesto proporcional al precio de la operación, impuesto generalmente conocido como *laudemio*.

Tal institución potencialmente favorable al campesino (de hecho, el censo enfiteútico fue el expediente de reproducción de las rentas agrarias a favor de los señores allí

(12) Aunque aquí habrían de hacerse ciertas salvedades, pues no faltan en el orden de la época arrendamientos con efectos reales análogos a los del censo (véase sobre todo Paolo Grossi, *Locatio ad longum tempus*, Napoles 1963; y confróntese aquí la desorientación en este punto, queriendo explicarlo por principios de prescripción inaplicables al mismo, de M. Artola, *Antiguo Régimen*, cit., págs. 74-75 y 132), y ya veremos que esto incluso llega a considerarse en la legislación del XIX. Las diversas apariciones en este estudio del tema de los arrendamientos refleja una transformación de la que aquí no podemos ocuparnos: desde la posibilidad de su asimilación al censo (garantizados los privilegios de la renta por la misma división del dominio que ahora vemos) hasta su configuración como un establecimiento agrario que, no otorgando ahora ningún derecho real al concesionario, garantiza de esta otra forma el nuevo derecho de la propiedad privada rentista. Con todo, cuando aquí hablamos de tierras de arrendamiento habrá de entenderse: tierras de establecimientos agrarios a corto tiempo que, por lo general, mas no exclusivamente, se califican como arrendamientos en el orden señorial.

donde los campesinos, tras la crisis del primer feudalismo más servil, habían conquistado mayores márgenes de libertad) no se presenta, en cambio, lógicamente, en tierras de arrendamiento, aunque aquí también de otro modo puedan producirse divisiones del dominio. Si los censos consignativos o crediticios, estabilizados o agrarizados (no redimidos o no devuelto por largo tiempo el capital), podían llegar efectivamente en ellas a producir tales divisiones, éstas no provocarían aquí, en tierras de arrendamiento, alguna modificación sustantiva en la condición del campesino no titular previamente de derechos: la relación censual se establece aquí entre otras partes, aunque no sea raro tampoco el fenómeno de que aparezca, finalmente, el campesino como obligado en forma directa a los mismos censos que contrae su señor, no siempre, además, con la disminución proporcional de otras rentas que fuera en este caso de esperar; los censos consignativos irredimidos pueden acabar por convertirse en cargas reales de la tierra que gravan, junto a los otros censos y rentas que pesan sobre la misma, a un campesino que no ha sido parte ni ha recibido beneficio alguno de tal operación. Y en todo caso, afecten en mayor o menor grado al propio campesino este género de censos, lo que queda claro, y ha de resaltarse, es que en ningún supuesto pueden crear derechos sobre la tierra a favor de quien previamente no los tuviera, en caso alguno producen derechos campesinos. Sólo los censos enfitéuticos o genuinamente agrarios presentan esta importante virtualidad.

Y no se olviden estas precisiones: los censos —por vía consignativa— pueden darse y multiplicarse —de hecho así ocurrió— en tierras de arrendamiento, y perpetuarse además como rentas prácticamente agrarias, sin que nada de ello implique el efecto favorable al campesino de los censos agrarios propiamente dichos. Con todo esto, en el momento de la abolición del sistema señorial y correspondiente desamortización que aquí ha de ocuparnos más especialmente, el conjunto del debate y las disposiciones sobre censos podrán justamente afectar a todas las regiones españolas, pero ello, según sus respectivas circunstancias previas, de una forma muy diversificada, con una

incidencia extremadamente variada; y el problema, como veremos, podrá esencialmente reducirse a un problema gallego y a un problema catalán por cuanto que las principales dificultades habrán de suscitarse, presentes los referidos derechos campesinos, respecto a la institución del censo enfitéutico.

Así, con todo, el mismo origen del censo —consignativo o enfitéutico: crediticio o agrario— había de ser un punto de la máxima importancia, pero, en la confusión general de las postrimerías del sistema señorial, entre tantas rentas procedentes en su mayor parte de siglos medievales de oscura constitución o de difícil calificación particular, ya más que de las condiciones originales de las principales especies de censo, se discute directamente de lo que habría de ser su consecuencia respecto a las variedades regionales más concretas: si la variedad en cuestión era redimible o irredimible, perpetua o temporal. Menos que de la teoría de los orígenes, se debatía la práctica de las cualidades concretas: de *redimibilidad* y de *perpetuidad* en cada caso.

Aunque, como decimos, a la entrada del siglo XIX impera mayor confusión en todo esto —ya lo veremos en el siguiente capítulo—, ha de considerarse que, en principio, el censo redimible (es decir, aquel en el que el *censualista* o receptor de la renta está obligado a aceptar el precio capitalizado que, para liberar así su tierra —el derecho que sobre ella le correspondiera—, le ofreciera el *censatario* o pagador, hasta este momento, de la renta) era el censo consignativo; el censo agrario, en cambio, este censo que podría interesar más directamente al campesino, sería, en principio, irredimible: el dominio directo no estaba aquí obligado a aceptar la capitalización de su renta y consiguiente liberación de la tierra por el titular del dominio útil que pudiera disponer de tal capital.

Pero las cosas no dejaron de replantearse y, entre otras novedades que luego veremos, aparecerá aquella tercera especie de censo de que antes hablamos. Esto, particularmente, se suscita en los casos, nada infrecuentes, en que la tierra se encontraba sometida a más de un censo agrario en cascada: quien recibía la tierra en censo del señor

podía, a su vez, haberla subcensuado, pretendiendo luego que el verdadero censo enfiteúutico —irredimible— era este segundo, mientras que el primero constituiría una especie diversa que no producía un auténtico dominio directo en el censalista y que era redimible por el censatario; y esta pretensión, que intenta así acercar determinados censos primitivamente agrarios al régimen de los censos consignativos, se calificará con el término de *censo reservativo*, supuesto a ser de este modo diferenciado del censo enfiteúutico inferior. Se entiende que, en tal supuesto, el señor sólo se ha reservado la renta y que ésta, habiéndosele así podido transferir un pleno dominio al censatario, constituye una carga redimible por este segundo. Y ya tendremos ocasión de aquilatar el alcance social de esta construcción doctrinal, tanto antes como después de la revolución iusliberal.

Y decíamos que, junto al de la redención, otro punto de debate en la materia de los censos, y de no menor significación social —ya lo comprobaremos— sería el de su *perpetuidad* o temporalidad. En principio, perpetuo había de ser el censo consignativo, aunque al mismo tiempo —y por la misma razón, se dirá— redimible: duraría indefinidamente en tanto que el censatario no redimiese su tierra reintegrando el capital. La perpetuidad en este caso se afirmaba particularmente respecto a la parte acreedora, que no podía establecer ni instar en principio al censatario de otro modo a la devolución del capital.

Temporal, en cambio, habría de ser regularmente el censo agrario; aquí el censalista podía establecer plazos previos para la resolución del censo, para la recuperación del dominio cedido; plazos que por lo común eran un tanto indeterminados, como el del tiempo de vida de nuevas cepas (como era uso especialmente en Cataluña: de ahí el término de *rabassa morta*), o el de algún número de *voces* o generaciones (así, como se estipulaba o entendía usualmente en Galicia, el tiempo de tres reyes, o también de tres papas), mas no por ello inefectivos. Se cedía en estos censos la tierra por un plazo más o menos determinado durante el cual el censatario o sus sucesores podían disfrutar de los derechos correspondientes al dominio útil y, tras

el cual, tener alguna opción a la renovación más o menos revisado del mismo censo, pero durante ni tras el cual podían pretender derecho alguno a la redención o liberación económica de tal carga o renta: efecto que fundamentalmente garantizaba la reproducción de los derechos de los señores censualistas en tierras de censo.

Estos censos tendían a ser de hecho perpetuos por cuanto que la renovación se encontraba prácticamente asegurada en el caso común de que los censatarios fueran también vasallos del censalista, sometidos igualmente a sus derechos señoriales —o, aún sin éstos, a cierta jurisdicción atribuida en la materia enfitéutica al propio censalista, como luego veremos—, razón por la que tradicionalmente no era tan importante la determinación efectiva del plazo. Sólo cuando venga a cuestionarse el régimen de estos censos por los intereses de los rentistas intermedios, se convertirá en una cuestión esencial ésta de la fijación real del plazo que, subrayando la temporalidad del establecimiento, impida cualquier pretensión de redimibilidad. Ya veremos así, en el capítulo siguiente, como también se pone en cuestión este punto de la temporalidad de los censos agrarios.

Y ya podemos, con el presente capítulo, contar con los elementos necesarios para comprender las formulaciones aparentemente arbitrarias de la época, las razones aparentemente incomprensibles de sus conceptos más generales en la materia: el censo es «el contrato por el cual se adquiere el derecho de percibir una pensión anual mediante la entrega de alguna cosa, o bien el mismo derecho a percibir la pensión, en cuyo sentido... se divide en consignativo, enfitéutico y reservativo» (13); ya podemos saber a qué viene esta categoría institucional construida con elementos tan heterogéneos y esta definición al mismo nivel de especies nada equivalentes entre sí. Y éstos son el concepto y la distinción esencial de los censos que, sin

(13) Joaquín Escriche, *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*, nueva edición, Madrid 1874, II, pág. 254, donde pueden además verse ulteriores «especies» de censo cuya consideración no interesa particularmente a nuestro estudio. Y sobre la calificación «contractual» del censo, reafirmada como veremos a lo largo del siglo XIX, véanse luego sobre todas notas 87 y 88.

mayor justificación ni razón, sin mayor análisis de sus determinaciones sociales, suele venir repitiendo, mediante la historia que ahora veremos, la doctrina jurídica hasta el presente, y con ella también otros estudiosos, discutiéndose si acaso alguna de sus incongruencias teóricas (14), pero no identificándose su congruencia práctica, no precisándose la función social de sus nada caprichosas definiciones.

Los censos en vísperas de la revolución

Las cuestiones principales que en esta materia se plantean en las postrimerías de la sociedad feudal y que la política ilustrada habrá de resolver o bandear a su modo ya han debido anunciarse en el capítulo anterior: las cuestiones, fundamentalmente, de perpetuidad y de redención de los censos. Y, como igualmente ya ha debido señalarse, tales cuestiones esencialmente se plantean conforme a los intereses de aquel sector que ahora cuenta tanto con una base de explotación social más firme en el entramado de la economía censual como con mayores posibilidades culturales de expresión y medios políticos de actuación en la sociedad de la época: los rentistas intermediarios o, según en casos se les designa entonces, «señores medianeros».

Se tratará así ante todo del conflicto, no simplemente entre censatarios subordinados y censualistas dominantes, sino, más complejamente, entre señores superiores y aquellos que eran sus censatarios y, a su vez, censualistas —o explotadores por otros medios— de campesinos inferiores (15). Se tratará, sustancialmente, de la pretensión de

(14) J. Fontana, *La revolución liberal*, cit., pág. 293: «los ingresos fundamentales que el señorío proporciona se pueden dividir en censos y regalías. Se llaman censos, de manera harto arbitraria, a los que proceden de la propiedad de las tierras y las casas... Pero ¿se puede hablar en serio de censo y de contrato enfitéutico en un caso que... incluía, entre sus condiciones, el someterse a la jurisdicción señorial?». Y podremos ver las secuelas de este tipo de imprecisiones de principio.

(15) El tema resulta conocido muy particularmente en el caso gallego de *foros* y *subforos*, hoy sobre todo gracias a los estudios que se citan en la nota siguiente; pero véase cómo puede ahora constatararse en otros supuestos: Isabel Morant Deusa, *Economía y Sociedad en un señorío del País Valenciano (siglos XVIII-XIX)*, Gandía, 1978, página 18: las relaciones agrarias de primer grado han podido venir pasando desapercibidas

estos agentes de reducir los censos de que eran deudores a alguna especie perpetua y redimible, al tiempo que mantener la figura del censo temporal e irredimible en aquellos de que eran acreedores, o incluso, de serles esto factible, reconducir estas segundas relaciones más propiamente agrarias al ámbito del arrendamiento, de la aparcería o de otras instituciones que igualmente redujesen o anulasen los derechos correspondientes a los campesinos no rentistas.

Por lo que sabemos (16), el siglo XVIII presencié una fuerte ofensiva de los intermediarios en tal diversificada dirección, viendo en lo que les afectaba los señores feudales de tierras de censo resentirse sus derechos y rentas. Y su reacción no faltará; ya en la forma de procurar la revaluación de sus propios censos a costa de los intermediarios, imponiéndoles en casos para mayor garantía la fijación de sus rentas en sus operaciones ulteriores con los

precisamente porque «la documentación señorial, normalmente utilizada para estos trabajos, no permite analizar más que las relaciones señor-enfiteuta... El análisis de los protocolos notariales nos permite pensar que era frecuente que los ricos campesinos (enfiteutas) estableciesen con los que no poseían tierras contratos de arriendo a corto plazo». Respecto a Cataluña, y tal vez por este mismo orden de razones, el tema no es pacífico: véanse los pronunciamientos contrarios en este punto de E. Giralt y A. Balcells en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.), *Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea*, Barcelona 1974, págs. 230 y 232.

(16) Véase, para los casos catalán y astur-gallego, Pierre Vilar, *La Catalogne dans l'Espagne Moderne*, París 1962, II, págs. 495-517 (y traducción catalana completa, y castellana compendiada); E. Giralt, *El conflicto rabassaire*, cit., págs. 56-58 y 62-63; A. Balcells, *El problema agrari*, cit., págs. 24-29; Baudilio Barreiro, *La pragmática de «perpetuación de censos». Intento de interpretación*, en *Compostellanum*, 17, 1972, págs. 73-116, y *La jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Población, sociedad y economía*, Santiago de Compostela, 1973, págs. 480-511; Jaime García Lombardero, *La agricultura y el estancamiento económico de Galicia en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1973, págs. 93-110, y *Aportación al estudio del sector agrario en la Galicia del siglo XVIII. Un contraste con Cataluña*, en *Agricultura, comercio colonial*, cit., págs. 44-66; Jesús García Fernández, *Organización del espacio y economía rural en la España atlántica*, Madrid, 1975, págs. 87-108, y *Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias*, Oviedo, 1976, págs. 27-43; Fausto Dopico, *A Ilustración e a sociedade galega*, Vigo, 1978, págs. 105-220, y, junto a J. García Lombardero, «La renta de la tierra en Galicia y la polémica por la renovación de los foros en los siglos XVII y XVIII», en *Hacienda Pública Española*, 55, 1978, págs. 193-199; José Manuel Pérez García, *Un modelo de sociedad rural del Antiguo Régimen en la Galicia costera: la península de Salnés (Jurisdicción de La Lanzada)*, Santiago de Compostela, 1979, págs. 299-335 y 363-380; Pegerto Saavedra, *Economía rural antigua en la montaña lucense. El Concejo de Burón*, Santiago de Compostela, 1979, págs. 61-76. Y he de agradecer la información facilitada a Montserrat Broggi en Barcelona, y a Mariano Peset en Valencia, y a Josefina Cruz en Sevilla.

campesinos; ya oponiéndose en todo caso, y siempre con un éxito más bien irregular, a la inclusión de sus propias rentas en el capítulo de los censos reservativos redimibles; ya también, más radicalmente —también más raramente—, prescindiendo llanamente de los intermediarios mediante el *despojo* de sus censos, según se decía, o no renovación de los mismos llegados a su término, para concederlos más directa, y más provechosamente, a los anteriores subcensatarios; según se nos dice, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, los monasterios de algunas órdenes «tienen ley para no hacer foros sino a labradores que cultiven los bienes por sí mismos» (17). Y que en estos casos de censos en principio temporales, se calificase ahora como «despojo» la no renovación del establecimiento cumplido su plazo, es un índice desde luego de la progresiva hegemonía cultural o ideológica de la renta intermedia.

Con logros más sustantivos en el caso de Galicia; habiendo encontrado acogida posiciones de los intermediarios en la Audiencia y otras instituciones que las elevan como demandas de todo el «Reino de Galicia», una provisión real de 11 de mayo de 1763 viene a disponer la suspensión —subraya— provisional de los contenciosos pendientes «sin permitir tengan efecto despojos que se intenten por Dueños del Directo Dominio», mientras que los censatarios sigan atendiendo las rentas (18). Y siguieron algunas medidas extensivas; en junio de 1768, para Asturias, el Bierzo y cualquier otra comarca donde también se diera este supuesto nominal del foro; incluso se quiso establecer, tras 1770, una interpretación tan amplia de tal disposición como para que alcanzase a los propios arrendamientos (19). La medida, por lo demás, dictada se-

(17) B. Barreiro. *La pragmática*, cit., pág. 83. Se detiene ahora en este punto J. M. Pérez García, *Un modelo de sociedad rural*, cit., págs. 316-330, pero con unos prejuicios de valoración positiva del régimen foral que lastran bastante su bien informado estudio.

(18) Véase, sobre todo, el citado artículo que dedica a esta medida B. Barreiro. En Galicia se habían venido alegando prácticas portuguesas de perpetuación de foros, y la comparación, efectivamente, podría interesar; véase M. J. B. de Almeida Costa, *Origem da enfiteuse no direito português*, Coimbra, 1957, págs. 6-14 y 195-197; Albert Silbert, *Le Portugal méditerranéen à la fin de l'Ancien Régime. Contribution à l'histoire agraire comparée*, París, 1966, II, págs. 756-762.

(19) Véase G. Anes, *Las crisis agrarias en la España moderna*, Madrid, 1970, páginas 283-289; o mejor a nuestros efectos, Angel García Sanz, *Desarrollo y crisis del Anti-*

gún decíamos como provisional, resistirá a la misma revolución iusliberal; y ya veremos con qué alcance e implicaciones.

Diverso fue entonces el caso de Cataluña; no falta aquí tampoco la pretensión de dicha especie de perpetuidad en base a una nueva extensión de la medida de 1763, pero, más eficaz en este caso al parecer el señorío superior y mejor representados sus intereses en las instituciones del Principado, la misma topa con la oposición irreductible de la propia Audiencia catalana: «no olvidando... el sistema de feudalidad que reina en él (el Principado) más que en parte alguna del Reino..., se inclina a creer (la Audiencia) que sería perjudicial cualquier innovación que pretendiese hacerse en los contratos a primeras cepas», persiguiéndose, en cambio, una mayor determinación —cincuenta años— del plazo de las mismas rabassas en la línea siempre de impedir la perpetuidad (20).

Y de aquí arranca la diferenciación entre estas dos variedades históricas del censo enfitéutico que son el foro y la rabassa; ambas seguían siendo, de derecho, temporales, pero la perpetuidad fáctica y provisional —valgan las expresiones— del primero establece la base que en el otro faltará para la revisión del régimen. A partir de ahora, mientras que la rabassa se reafirma como enfiteusis temporal e irredimible —luego veremos que, por análogas razones, más tarde se negará su carácter enfitéutico—, los foros que median entre señores e intermediarios tenderán a reconducirse al terreno del censo reservativo redimible, dada dicha perpetuidad, y argumentándose en parte con un

guo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814, Madrid, 1977, págs. 286-310. En los trabajos de mayor amplitud dedicados últimamente a Valencia y a Andalucía, se elude este punto de la reforma ilustrada de los establecimientos agrarios (Manuel Ardit, *Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración feudal en el País Valenciano, 1793-1840*, Barcelona, 1977, págs. 36-51) o se toca de forma muy confusa (A. M. Bernal, *La lucha por la tierra en la crisis del Antigua Régimen*, Madrid, 1979, pág. 144); ambos, de otra parte, se empeñan en detectar acciones antiseñoriales en pleitos de derecho señorial. Puede verse también, para proyectos reformistas de introducción del censo en tierras de arrendamiento, B. Clavero, *Mayorazgo*, Madrid, 1974, págs. 314-330.

(20) Pueden verse los textos del caso en Jaime Carrera, *Historia política y económica de Cataluña*, IV, Barcelona, 1947, págs. 53-57 y 67-69.

derecho canónico que podía alegarse por la condición generalmente eclesiástica de los señores superiores en Galicia, un derecho canónico que, en garantía de sus propios privilegios señoriales, no admitía división perpetua del dominio y que así ahora podía volverse contra sus beneficiarios: el «foro perpetuo» había de transferir entonces todo el dominio al censatario, supuesto como ya sabemos del censo reservativo (21). Y los mismos foros que median entre los intermediarios y los campesinos, donde ya no cabía el argumento canónico, seguían en esta época, aunque también perpetuos ya de hecho, como indisputablemente irredimibles, pero contarán en el XIX, como veremos, con una base para la pretensión de redimibilidad que faltará en las rabassas.

Pero en el punto de la redención no dejarán todavía de presentarse por otra vía algunas novedades más generales en las vísperas de la revolución. En concreto, entre las medidas contra la devaluación de los vales reales y para su amortización o retirada por la hacienda que había abusado de este expediente crediticio por los apuros fiscales de las guerras que siguieron a la revolución francesa (22), los mismos vales se declaran de curso legal para la redención de ciertos censos, al tiempo que ésta se fomenta con vistas a dicha recuperación de papel, ya porque el fisco fuera el censalista —supuesto que se amplía con la desamortiza-

(21) El derecho canónico de hecho prohibía en principio toda división del dominio (así en el título *de rebus ecclesiae non alienandis* de las *Extravagantes Communes* —III, IV— del *Corpus Iuris Canonici*: se prohíbe «omne pactum per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem ultra triennium, ... infeudationem vel contractum emphyteuticum...»), mas no sin excepciones que tendían a reducir la prohibición a divisiones perpetuas. De otra parte, como es sabido, para el caso gallego estas modificaciones son tanto más difíciles de seguir por cuanto que, al contrario que en Cataluña, no se contaba en Galicia con un derecho escrito territorial y una correspondiente doctrina o jurisprudencia que mejor podrían reflejarlas; en realidad, como veremos, el derecho gallego será el derecho regional que identifique de nuevo —pues son un mismo término— el doble sentido de *fueros* y *foros*: los censos agrarios constituirán el *derecho foral* de Galicia.

(22) Véase Richard Herr, «Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV», en *Moneda y Crédito*, 118, 1971, págs. 37-100, y «La vente des propriétés de mainmorte en Espagne, 1798-1808», en *Annales, E.S.C.*, 1974-1, págs. 215-228. J. Fontana, *La quiebra de la Monarquía Absoluta, 1814-1820*, Barcelona, 1971, págs. 145-167, y *Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español, 1823-1833*, Madrid, 1973, págs. 37-42 y 193-205.

ción—, ya porque pudiera de otra forma obligarse a la imposición en su caja de amortización del capital en vales resultante de la redención (23). Aquí sólo nos interesa la incidencia de estas medidas en la posible revisión del régimen de las diversas especies de censo en punto a redimibilidad; y en ello destacará un reglamento de 17 de enero de 1805, por partir de unas formulaciones muy generales respecto a la redención y por transmitirse a la época siguiente en la recopilación legislativa oficial del mismo año, que estará teóricamente en vigor a lo largo de casi todo el siglo XIX (24).

En esta disposición de 1805 se concede expresamente «permiso a todos los que tengan contra sí censos perpetuos y al quitar, y asimismo a los que posean fincas afectas a algún canon enfiteútico, para que desde luego los puedan redimir con Vales», precisándose más adelante que «podrá redimir todo poseedor de fincas, no sólo los censos al quitar con que se hallen gravadas, sino también los perpetuos e irredimibles» y que «no podrán redimirse los dominios solariegos o establecimientos de carta puebla, ni las prestaciones de la octava, décima, undécima u otra parte alícuota de los frutos de uno o más predios quando no conste haber sido adquiridas por precio cierto, ni finalmente los foros temporales, como los del Reino de Galicia y Principado de Asturias».

¿Qué quiere decirse con todo ello? Aparte de recordarse que los foros seguían siendo —de derecho— temporales —y por ende irredimibles—, y aparte otras cuestiones nada sencillas en las que aquí no hemos de entrar (25),

(23) Para este último aspecto, en el que aquí no entramos, B. Clavero, *Mayorazgo*, cit., págs. 331-337.

(24) La conocida como *Novísima Recopilación*, que contiene un título de censos (10, 15) particularmente confuso (desde una ley de Toro —año 1505— sobre comiso del censo cuyo supuesto de hecho ya resultaba muy dudoso, hasta este reglamento de 1805 cuyo alcance tampoco estaba claro) que no dejará de asistir a las alegaciones tras la revolución del derecho anterior a la misma cuya importancia habremos de apreciar. Esta recopilación se publicó oficialmente como *Recopilación de Leyes de España* mas, en nuestra materia como en otras, vanamente se buscará aquí el derecho catalán u otro no castellano, cuya vigencia, respecto a la que se planteará en nuestra misma materia el problema de los «Fueros», todavía suscitaba mayores incertidumbres en esta época.

(25) Sobre ellas se publicó entonces un manual: Juan López Fando, *Demostración práctica del modo de hacer las liquidaciones para redimir censos*, Madrid, 1805; y véase R. Herr, *Hacia el derrumbe*, cit., págs. 47, 53, 57, 70-71 y 89.

se introduce ahora una especie de principio de redimibilidad de censos, de más inequívoca aplicación a aquellos que pudieren tener un origen consignativo —«censos perpetuos y al quitar», rentas «adquiridas por precio cierto»—, y más problemática, pero también extendida en principio a éstos, respecto a los censos agrarios —«canon enfitéutico», censos «perpetuos e irredimibles»—, mas con la excepción en todo caso expresa —y con particular mención aquí de los foros— tanto de aquellos que se encontrasen más vinculados a una función señorial —«solariegos», establecidos por «carta puebla»...— como de aquellos que, de origen no consignativo, fuesen derechos de carácter proporcional. La rabassa, como censo temporal, queda indudablemente también exceptuada.

Se estaba así ciertamente lejos de declararse, sin más, la redimibilidad de los censos agrarios, pero, en todo caso, como ya había ocurrido con el tema de la perpetuidad aunque aquí por otra vía más indirecta, venía a introducirse una especie de principio favorable a la misma. Y ello, a nuestros efectos, podemos valorarlo con independencia de su misma significación inmediata en la época de su promulgación (26), dada su ulterior transcendencia a la propia revolución iusliberal; como diría, con toda su autoridad, el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de octubre de 1863: «La ley 24, título 15, libro 10 de la Novísima Recopilación (es decir, ésta —no exactamente ley— de 1805), que trata de la redención de los censos, y la de 8 de junio de 1813 sobre arrendamiento de predios rústicos, contratos ambos con los cuales tienen analogía y seme-

(26) Antonio Domínguez Ortiz, *Sociedad y Estado en el Siglo XVIII español*, Barcelona, 1976, págs. 421-422, acoge el error común de que en 1805 se autorizó «la redención de toda clase de censos enfitéuticos, incluidos los foros» y, para explicar entonces la falta de redención de los foros arguye que la incidencia de la medida sería mínima por su muy alto tipo de capitalización (100 por 1,5, aun de forma supletoria a pactos y reglas locales). Pero precisamente la factibilidad de estas redenciones llevaron incluso a añadir enseguida nuevas excepciones, como la del caso valenciano donde eran importantes las enfiteusis de titularidad fiscal: Carmen García Moneris, *Canga Argüelles y el patrimonio real de Valencia, 1805-1806*, págs. 158-160, en *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, 1, 1980, págs. 135-163. El reglamento de 1805 fue tan sólo una de las medidas que se dedicaron a esta materia entre 1798 y 1808, habiéndonos por nuestra parte limitado a ella por la razón ya señalada de su significación ulterior.

janza los foros, al exceptuar a éstos de sus disposiciones, han reconocido el estado legal creado por las Reales Cédulas» de 11 de mayo de 1763 y 28 de junio de 1768 (27), esto es, el régimen —provisional en principio, para mayor ironía— que acabamos de ver y que así encuentra de algún modo aplicación a lo largo del siglo XIX: en los capítulos siguientes hemos de estudiar cómo y con qué alcance.

En este capítulo nos hemos centrado en aquellas vertientes de la institución censual que, resistiendo mejor a la revolución iusliberal, habremos luego de encontrar y analizar; convendrá por ello dejar advertido que no nos hemos especialmente ocupado de otros elementos no menos importantes de su constitución social que, con su carácter más netamente señorial, no superarán dicha revolución. Los censos agrarios venían desarrollándose desde época medieval como un componente más de las relaciones señoriales, encontrándose con todo los campesinos censatarios tradicionalmente en una situación mucho más subordinada al dominio directo de lo que aquí ha podido reflejarse, a menudo bajo la misma jurisdicción del señor censalista.

Incluso en los casos de los censualistas intermediarios que ya no solían disfrutar de condición específicamente señorial, éstos podían beneficiarse de un derecho que se venía elaborando bajo criterios señoriales de estrecha sujeción de los campesinos censatarios; así, por ejemplo, en la materia de *capbrevación* o *apeo*, esto es, en la cuestión fundamental del registro y demarcación de tierras censales y fijación correspondiente de derechos económicos, ello podría verse claramente por cuanto que la misma quedaba prácticamente en manos de los censualistas. A estas alturas no gozaban éstos ciertamente de una jurisdicción exclusiva en tan importante materia registral, pero sí, en todo caso, de una jurisdicción preferente: «Siendo los *emphiteusis* (como en el Principado de Cataluña es muy frecuente) de privados dueños alodiales y directos —se nos dice así respecto precisamente a la *capbrevación*

(27) Y ello pese a que, en base a la misma irresolución real del tema tras 1763, el mismo Tribunal Supremo había puesto en duda en más de una ocasión la propia vigencia, aún en su época, de este régimen; véase en J. Gil, *De los censos*, cit., páginas 66-69 y 279-282.

en el siglo XVIII—, éstos pueden y suelen nombrar jueces y de sus declaraciones se apela a la Audiencia», apelación siempre entonces problemática, tal vez de escaso efecto cuando puede añadirse que «muchas veces los señores privados... nombran a la misma Audiencia por juez emphiteuticario» (28). Introducirnos ahora más específicamente en este orden de cuestiones podría alejarnos demasiado de nuestro actual propósito, que quiere ceñirse al análisis de la materia en la revolución iusliberal española.

LOS CENSOS EN LA REVOLUCION

Los censos en la abolición de los señoríos

La institución de los censos se comprendía con todo en una estructura señorial; los censos agrarios podían institucionalizar, en la misma jerarquía de un dominio dividido, la subordinación en tal estructura del trabajo al señorío; los censos crediticios, a su vez, con su supeditación institucional a las mismas condiciones de la renta territorial, respondían asimismo a principios contrarios al desarrollo del capital. Por ello no es de extrañar que el censo, en compañía del mayorazgo, del diezmo, de la jurisdicción señorial, de las manos muertas, etc., apareciera como objeto a abatir por una revolución iusliberal o antiseñorial; sus principios de división del dominio y establecimiento de rentas potencialmente perpetuas y en buena parte no redimibles, mal habrían de caber en la nueva sociedad con sus principios de propiedad privada y libre contratación, en la sociedad que precisare de estos elementos institucionales para el desarrollo de una economía ya capitalista (29). Pero

(28) Francisco Antonio de Elizondo, *Práctica universal forense de los Tribunales de España y de la Indias*, II, Madrid, 1792, pág. 19; mas específicamente, Jaime Tos y Urgellés, *Tratado de la capbrevación según el derecho y estilo del Principado de Cataluña*, Barcelona, 1784 y 1826. Mas es cuestión que espera investigación.

(29) Véase así, para el caso francés que estaría bien presente a través del proceso codificador que veremos, Marcel Garaud, *La Revolution et la propriété foncière*, París, 1959, págs. 257-275. Para mayor radio comparativo siempre pueden asistir las actas del simposio de 1968 sobre *L'Abolition de la féodalité dans le Monde Occidental*, París, 1971 (hay traducción parcial castellana, 1979).

el caso es, según sabemos, que la revolución española no parece alcanzar al capítulo de los censos; he aquí el problema.

Primera disposición que suele considerarse en España abolutiva del señorío es el decreto de las cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, una disposición que ya en la época destacó por su insuficiencia y por su ambigüedad (30); una disposición que puede incluso resultar sorprendente si mantenemos tal calificación de abolutiva del régimen señorial; de hecho, en ella, sólo hay un principio general realmente inequívoco: el de la incorporación a «la Nación» de la jurisdicción de los señoríos, con un anexo de supresión de «dictados» de vasallaje y de algún otro privilegio señorial de igual modo aparatoso y no mucho más sustantivo; y sólo, en ella, una materia realmente articulada o regulada: la del derecho de compensación o indemnización de los señores por tal pérdida, a propósito de cuya calificación se contempla la cuestión de presentación de títulos o prueba documental de los derechos en litigio entre el señor y «la Nación». En consecuencia, «los señoríos territoriales y solariegos» subsisten como «derechos de propiedad particular».

En este contexto, nuestra cuestión del censo apenas apunta, pero apunta de una manera que tendrá, luego, gran significación: como parte del referido «señorío territorial y solariego» que así se respeta, los «censos... se deberán considerar desde ahora como contrato de particular a particular». ¿Qué alcance tiene esto? ¿Cómo debe entenderse: como una declaración de simple subsistencia, ahora legitimada mediante dicha calificación contractual, o como un verdadero imperativo legal de modificación de su régimen mediante su oportuna adaptación a las condiciones de una economía realmente contractual? La disposición del decreto, siendo en todo caso ambigua, parece apuntar en la

(30) El texto puede verse en S. Moxó, *La disolución*, cit., págs. 191-192, cuyo análisis se encuentra a mi juicio seriamente hipotecado por concederles valor explicativo a las tendenciosas distinciones del decreto que ahora veremos, basando en ellas su estudio, lo que no ha dejado de pesar en toda la investigación ulterior; véase ello en B. Clavero, «Señorío y Hacienda a finales del Antiguo Régimen en Castilla», en *Moneda y Crédito*, 135, 1975, págs. 111-128.

primera dirección, la cual, efectivamente, tras otros intentos de interpretación alternativa, fue la revalidada por la reacción señorial de 1814, que lo mantendría en vigor. Y era éste un problema que, evidentemente, afectaba no sólo a los censos, sino en general a la misma calificación y régimen del «señorío territorial» a subsistir, pero aquí únicamente nos interesa en lo que toca a nuestra institución.

Otras medidas de estos mismos años también podrían, en principio, afectar a la institución de los censos; así, fundamentalmente, el decreto de 8 de junio de 1813, que establecía una cierta libertad de arrendamientos rústicos, pero, como no dejaría con posterioridad de recordar el Tribunal Supremo precisamente declarando su inaplicación a los censos, en él no dejaban ya de introducirse expresamente excepciones como la de los foros. Y aún, como veremos, en ocasiones, todavía no podía aplicarse dicho género de libertad, que sobre todo implicaba la posibilidad de desahucio del campesino, a los mismos arrendamientos, por resultar éstos, en algunos casos, asimilables a los censos, y no al contrario (31).

Como es bien sabido, el restablecimiento global de la legislación de Cádiz en marzo de 1820 (el mantenimiento en vigor de aquel decreto de señoríos de 1811 había sido algo excepcional) plantea enseguida la cuestión de otras alternativas en el entendimiento y aplicación de tal medida, pero negándose el rey a la sanción de la disposición correspondiente, ésta, conforme a la constitución vigente de 1812, sólo podrá promulgarse a la tercera legislatura; y así aparece la ley antiseñorial de 3 de mayo de 1823, cuando ya prácticamente el sistema parlamentario tenía la batalla de nuevo perdida ante una nueva reacción. Aunque no, por ello, para este momento, y aunque tampoco porque luego realmente se aplique según veremos, esta ley merece ciertamente consideración (32).

En ella, nuestro tema no deja de regularse; ahora, no aceptándose ya la pervivencia de ningún tipo de señorío, se declara más explícitamente la reducción de los

(31) Véanse las referencias de notas 12, 27, 43, 68 y 71.

(32) Su texto en S. Moxó, *La disolución*, cit., págs. 254-256.

censos a «contratos de particular a particular... sin fuero especial ni privilegio alguno» de los censualistas, estableciéndose provisionalmente —«mientras se arreglan de una manera uniforme estos contratos en el Código Civil»: lo que veremos que se atrasaría por décadas ante la misma resistencia de los censualistas— algún punto de su regulación; finalmente, y tras haberse distinguido —forzada, pero intencionadamente— entre «foros» y «enfiteusis», se dispone que estas segundas, sean o no de origen señorial, «se podrán redimir como cualesquiera censos perpetuos bajo las reglas prescritas» en las medidas que ya conocemos de 1805, lo cual en todo caso, al considerarse ahora a la enfiteusis como censo perpetuo, sigue dejando fuera de tal posibilidad también, junto a los foros, a las rabassas. En suma, aún con salvedades y aplazamientos de cuestiones importantes, se apuntaba ahora claramente en la segunda dirección antes indicada: subsistencia de los censos, pero con adaptación de su régimen a un sistema más propiamente contractual.

Mas al mismo tiempo se introducían interesadas confusiones (33). La ley se refiere a «los enfiteusis de señorío que hayan de subsistir», calificativo «señorial» que, no pudiendo implicar en ella el mantenimiento de caracteres verdaderamente señoriales en los censos admitidos, podría investir a su misma admisión de una mayor provisionalidad, y esto más aún cuando no sólo se emplazaba a un código cuya virtualidad anticensual habremos de comprobar, sino que además se exigía expresamente declaración judicial del carácter censual del derecho para que el mismo pudiera mantenerse. La confusión podría en todo caso presentarse porque además, a efectos compensatorios, en la misma ley se sustituyó la expresión de «título señorial»

(33) Mas no tanta confusión como la que pueda ahora resultar de Joaquín del Moral Ruiz, *Hacienda y Sociedad en el Trienio Constitucional, 1820-1823*, Madrid, 1975, que trata la materia entre afirmaciones peregrinas (la abolición de señoríos habría comenzado en 1805; la desvinculación, en 1789...) y apreciaciones bien equívocas en nuestro punto (págs. 25-40 y 145-150 especialmente). Vuelve más cuidadosamente a la consideración de las primeras medidas antiseñoriales M. Ardit, *Revolución liberal*, cit., páginas 156-158, 179-187, 222-225 y 267-272, bien que sin precisar tampoco la cuestión de los censos pese a haber de resaltar en el caso valenciano, que especialmente estudia, el peso de los enfiteutas.

de sus proyectos, respecto a los derechos a ser abolidos, por la de «título feudal» que se entendía desde luego como más restrictiva: un resquicio para la defensa de algo «señorial» —a nuestros efectos: censos no sometidos a un régimen propiamente contractual— podía aún ofrecerse a una aplicación tendenciosa de la ley, y más todavía cuando, según hemos visto, en ésta se introducía la confusión más intencionada de excluir a los principales censos enfiteúticos existentes de la categoría de enfiteusis que, según los propios imperativos de un sistema de propiedad privada y libre contratación, había de declararse redimible. A partir de ahora, con apoyo en la misma ley, podrá tanto alegarse directamente aquella disposición de 1805 para justificarse unas excepciones a la redimibilidad que allí se declararon precisamente por un explícito imperativo señorial, como también argumentarse que el foro y la rabassa no son «verdaderas enfiteusis» a los mismos efectos de evitar su redención (34).

Tras la revolución definitiva de 1836, el 2 de febrero de 1837, se restablece esta ley de 1823, aunque ya con el compromiso de procederse a la inmediata promulgación de otra ley antiseñorial que, interpretándola —no atreviéndose a derogarla—, moderase sus disposiciones. Y en dicho compromiso y consiguiente trabajo parlamentarios no deja de manifestarse la tendencia con los conceptos más adecuados al caso: se trataría de distinguir entre, por un lado, un «señorío o feudalismo» ya fenecido con la legislación anterior y, por otro, el «sagrado derecho de la propiedad y los contratos», derecho donde debieran quedar definitivamente comprendidos los censos existentes: expresión del derecho de propiedad privada en materia de contratación agraria, expresión —se quiere ahora— de la

(34) Aunque dispersamente y no sin incertidumbres en esta concreta materia, puede perseguirse el debate para estos primeros años de Ernest Lluch. *El pensament econòmic a Catalunya, 1760-1840. Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana*, Barcelona, 1973. Y querer reducir la problemática terminológica de estas medidas a términos de simpatía de clases (J. Fontana. *La revolución liberal*, cit., pág. 286: «conscientes o no de ello, los historiadores que hoy disputan acerca del sentido que hay que dar a unas palabras como *feudal* y *feudalismo* no hacen otra cosa que adoptar la interpretación de los señores y de los campesinos») sólo me parece una buena ocurrencia para no enfrentarse con el problema.

voluntad privada de las partes, con toda la abstracción del caso respecto a la procedencia histórica real —nada voluntaria desde luego para el campesino— de su régimen concreto (35). La ley ya ha dicho que el censo ha de ser contrato, y esto —viene a sentarse ahora, corrigiéndose la tendencia de la ley de 1823, aunque sin volverse a la fórmula y sustancia de «señorío» del decreto de 1811— debe entenderse como revalidación de la propia institución, no como imperativo de su transformación hacia condiciones estrictamente contractuales que, cuando menos, habrían de exigir su redimibilidad.

Y en la consiguiente ley definitiva de abolición del señorío, promulgada el 26 de agosto de 1837 (36), no deja de sustanciarse dicha composición: los censos se consideran sin más —ya, al contrario que en 1823, sin mandato de supresión de «fuero y privilegio» y sin perspectiva de código— como elemento de «propiedad particular», declarándose expresamente además la subsistencia de «foro, censo o enfiteusis» en tierra desamortizada o «incorporada a la Nación». Por último, o en primer lugar para esta ley, se regula ahora la cuestión procesal de forma que, al contrario de lo establecido en 1823, los censos se mantienen sin el requisito de declaración judicial, mediante prueba por el censalista, de su carácter o entidad (37). En los capítulos siguientes podremos ciertamente apreciar la transcendencia de todos y cada uno de estos particulares de la ley definitiva de 1837.

No puede decirse, desde luego, que nuestra cuestión se encuentre así resuelta de una forma inequívoca: tales elementos podrán resultar decisivos para su resolución ulte-

(35) Preámbulo del proyecto de 11 de febrero de 1837; véase en S. Moxó, *La disolución*, cit., págs. 148-150, quien no se interesa por nuestro tema, como ya dijimos.

(36) Véase en S. Moxó, *La disolución*, cit., págs. 262-264.

(37) Este era tema central de esta ley que ya analizaba S. Moxó, *La disolución*, cit., págs. 157-164, aun con apreciaciones bien discutibles sobre su carácter «equitativo»; cierto que la jurisprudencia ulterior será decisiva, a este efecto, pero no hubiera podido hacerse recaer la carga de la prueba en los campesinos con la ley de 1823 y a ello se dirigía claramente, con todas sus ambigüedades, ésta de 1837. Véase también, aun con tendencia a primar ahora el factor sociológico en forma que desplaza o aún abiertamente desprecia la consideración de estas disposiciones, A. M. Bernal, *La lucha por la tierra*, cit., págs. 97-123.

rior, pero los mismos distan todavía de perfilarla netamente. La misma diversidad regional incidente en nuestra materia podía alentar esta relativa indeterminación en que la deja una legislación de carácter general; difícilmente al menos podía establecerse un derecho inequívocamente favorable a los rentistas intermediarios mejor situados desde la época anterior (así, por ejemplo, con la redimibilidad sin tapujos de los censos que les gravaban y la conversión en arrendamientos de los de carácter inferior, con la posible motivación del carácter agrario de estos segundos, y no de los primeros) cuando existían, y con todo su peso, en el caso castellano, importantes regiones de arrendamiento que, de favorecerse así a los rentistas, permitían la atribución sin más de la propiedad de la tierra a los señores, a aquellos mismos señores que, con la competencia allí de dichos intermediarios, no contaban realmente con posibilidades de imponer solución análoga en tierras de censo. O mucho más difícil habría de resultar el planteamiento, en nuestra revolución, de la conquista de la propiedad de la tierra por los campesinos censatarios (lo que jurídicamente era mucho más sencillo: redimibilidad general efectiva de todos los censos, si no se tenía fuerza para imponerse su abolición no compensada como derecho señorial): tal pretensión difícilmente encontraría el apoyo de campesinos de tierras de arrendamiento que podían aspirar a la estabilidad institucionalizada del campesino censatario en otras regiones (38).

(38) O al menos tal solía ser la formulación culta de tales aspiraciones —tan progresistas hoy para algunos historiadores como conservadoras para otros y que seguramente no caben en estos esquemas—, según puede reflejarse en algún caso más notorio (véanse así los textos, más que la lectura, de Joaquín Arango, *La crítica de Flórez Estrada a la desamortización de Mendizábal: una oportunidad perdida para el capitalismo español* en *Revista de Trabajo*, 31, 1970, págs. 113-256). Y ello pudo ser bien tangible al menos hasta la desamortización civil, por cuanto que en ocasiones se había procedido a repartos en censo principalmente de tierras municipales; véase en A. M. Bernal, *La lucha por la tierra*, cit., págs. 125-141 y 337-350, aun representando en términos de continuidad de una misma «lucha por la tierra» (pág. 420) tales aspiraciones más limitadas y factibles entonces en estas tierras de arrendamiento, y posteriores vindicaciones campesinas de propiedad no gravada de la tierra; y ello no sin efecto: con tales indistinciones se pueden seguir manteniendo tópicos como el de la persistencia de una misma «estructura de la propiedad» bajo la revolución liberal que implica una absoluta desatención a la propia transformación que sufre en ella el derecho de propiedad, o

En definitiva, junto a la usual afirmación de que, en España, mediante la abolición de los señoríos, se produce la atribución de la propiedad de la tierra a los antiguos señores, efecto realmente perseguido por las referidas leyes y acrecentado por una práctica procesal que, en los contenciosos jurídicamente resueltos, hizo recaer prácticamente la carga de la prueba en los mismos campesinos; junto a esto debe atenderse otro elemento cuya sola presencia, además, distorsiona toda la composición: el censo no es una renta más que consiga subsistir, sino una renta tan cualificada que llega a afectar profundamente al mismo principio de atribución de la propiedad de la tierra tras la abolición del señorío. El panorama así, como decimos, viene a resultar muy complejo, quedando en parte irresuelto por la legislación abolutiva de derechos señoriales; y la cuestión podrá así de nuevo presentarse ante otro tipo de medidas: tanto, esencialmente, ante las medidas desamortizadoras, como ante el proyecto de codificación civil que, recordado por la ley de 1823 y silenciado por la de 1837, se encontraba preceptuado tanto en la constitución de 1812 como en la de 1837. De todo ello hemos de ocuparnos a continuación.

Los censos en las medidas desamortizadoras

En las disposiciones desamortizadoras no puede dejar de atenderse el caso de los censos, bien que el suyo sea un tema tradicionalmente descuidado por los estudios —hoy ya numerosos— dedicados a la desamortización, los cuales suelen reducir su objeto, junto a las motivaciones fiscales del caso, a una nuda cuestión de transferencia de «propiedad», desatendiéndose todo el problema básico de transformación de derechos aquí implicados (39). En estos te-

como el de la inexistencia de una inespecífica «revolución campesina» cuyas posibilidades históricas hasta tal punto no se concretan que se le puede acabar declarando fuera de lugar en la España del XIX (pág. 455: «La revolución de 1868 fue la revolución burguesa que, indirectamente, potencia al proletariado... El intento campesino de transformar, sobre la marcha, una revolución política en social con todas sus consecuencias era una obra prematura»).

(39) No poco sintomáticamente, pues representa una de las posiciones más valorativas de las diversas implicaciones del fenómeno desamortizador, nuestro problema

mas al menos, el aparato estadístico no siempre entraña penetración analítica.

En algunos supuestos, los propios censos son declarados directamente desamortizables, ofreciéndose su adquisición a los mismos censatarios; así, conforme a diversos decretos de las cortes de 1820-1823 restablecedores de las medidas de 1805, resultarán por tal vía redimibles «los censos consignativos, enfiteusis, foros, misas y pensiones, y toda carga perpetua o temporal que pertenezca a la Nación o al Crédito público por la reforma de los regulares, bienes de patrimonio Real, pertenencias de la Inquisición, redención de cautivos, temporalidades de los jesuitas, obras pías, santuarios, memorias y fundaciones que están aplicados y se aplican al pago de la deuda pública y graviten sobre bienes y rentas de dominio particular» (40).

Aun situándose expresamente en relación de continuidad con las medidas tardofeudales, pueden aparecer ahora conceptos nuevos redimibles por desamortización —advirtiéndose la presencia de los foros—, al tiempo que la misma tiende a regularse de una forma menos restrictiva, y efectivamente puede la misma extenderse por ampliarse su supuesto con el desarrollo general de la desamortización, recayendo en la titularidad pública nuevos derechos censuales y abriéndose con ello la posibilidad de su rendición. Todo lo cual podrá conducir, más seriamente que en

apenas está presente en el debate que conduce F. Tomás y Valiente, *Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis*, en *Moneda y Crédito*, 131, 1974, págs. 95-160, y *El proceso de desamortización de la tierra en España*, en *Agricultura y Sociedad*, 7, 1978, págs. 11-33.

(40) La relación es de decreto de 9 de noviembre de 1820, que puede verse en Antonio Casas, *Recopilación concordada y comentada de la Colección Legislativa de España*, I, Granada, 1857, págs. 128-129 (los manuales de desamortización suelen arrancar de fecha más tardía). Para la situación de esta desamortización, también menos atendida en las exposiciones al uso, Juan Brines Blasco, «Deuda y desamortización en el Trienio Constitucional, 1820-1823», en *Moneda y Crédito*, 124, 1973, págs. 51-67; Jaime Torras, *Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823*, Barcelona, 1976, págs. 149-176; algunas de sus disposiciones en J. Moral Ruiz, *Hacienda y Sociedad*, cit., págs. 252-285. Respecto a los censos, las redenciones reguladas en 1805 se habían interrumpido en momentos de más cerrada reacción señorial, en 1818 y 1819; las que se celebren ahora durante el trienio serán a su vez declaradas nulas por cédula de 16 de enero de 1826; para referencias precisas de estas disposiciones, Natividad Moreno Garbayo, *Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional*, II, Madrid, 1977, mediante el índice de materias.

1805, a planteamientos más generales de revisión de la irredimibilidad de los censos agrarios.

Por decreto de 5 de marzo de 1836, se declara más generalmente redimible el censo de tierra sometida a desamortización, con independencia de su origen o carácter: «se declaran en estado de redención desde ahora todos los censos, imposiciones y cargas, de cualquier especie y naturaleza» que pesen sobre bienes nacionalizados (41). Otro decreto inmediato, de 10 de abril, se dirige a promover estas redenciones en los casos de los censos agrarios irredimibles: «que los derechos enfitéuticos y forales... pueden redimirse no obstante su perpetuidad», saliendo al paso a un tiempo de una posible interpretación de tal medida que sería muy perjudicial para el censatario: se advierte que la opción de redención no sustituye a su derecho dominical; «que las ventas de las fincas rústicas y urbanas que hoy se hallaren dadas en enfiteusis y foros no han podido ni pueden verificarse ni entenderse sino en el dominio directo, y nunca en el útil, que continuará disfrutando el enfiteuta en los términos de la capitulación o contrato existente»: si el censatario no ha adquirido la plena propiedad de la tierra mediante la redención, la desamortización siguiente sólo afectará al dominio directo, respetándose en todo caso su derecho anterior (42).

En este segundo decreto se anunciaba, a dicho efecto de fomento de las redenciones, un procedimiento específico de desamortización de los censos por esta vía de la redención, procedimiento previo a la desamortización en otro caso de la tierra, pero con dicho respeto expreso al derecho sobre la misma del censatario, por la vía general de la subasta pública; lo cual, efectivamente, se regula por un decreto de cortes de 31 de mayo de 1837 que además se extiende a reconocer a los arrendatarios más estables —de arrendamientos anteriores a 1800— un derecho a la redención análogo al de los censatarios. Pero la más formal ley

(41) Puede verse en A. Casas, *Recopilación*, cit., II, págs. 216-218.

(42) En la misma recopilación citada, II, pág. 229. La declaración de salvaguarda del dominio útil en los bienes nacionalizados se incluye también a continuación en la ley antiseñorial de 1837, al garantizarse la continuidad de los mismos censos según ya vimos.

de desamortización de los bienes del clero secular de 2 de setiembre de 1841 incluye los censos entre los derechos a ser desamortizados sin disponer nada —tampoco sus instrucciones— sobre su eventual redención previa o procedimiento específico que no obligase a los censatarios, para conseguir en todo caso la redención, a pujar en subasta (43).

Tras la sabida interrupción del proceso desamortizador, la ley general de desamortización de 1 de mayo de 1855 —con su instrucción de 31 del mismo mes— acude a nuestro tema, regulando de nuevo la redención previa: los censatarios gozarán de un plazo de seis meses, a contar desde la publicación de la ley, para optar por ella, impidiendo así la pública subasta del derecho censual y haciéndose con el pleno dominio de la tierra correspondiente; a tales efectos, el valor de los censos se capitalizará a razón de un índice que se mueve entre el más favorable del 100 por 10 y el más gravoso del 100 por 5, con ciertas facilidades en algunos casos para efectuarse el pago; de no ejercerse esta opción, se garantiza la subsistencia ulterior del censo o del derecho del censatario, no así la de los arrendamientos, cuya caducidad se declara por efecto de la desamortización frente a la anterior tendencia de su asimilación a los censos (44).

En estas fechas de paréntesis más liberal, quiso también resolverse a su modo el problema que debía venirse arrastrando de impago de rentas desde la legislación anti-señorial: la misma ley general de desamortización de 1855 se extiende a declarar que «se perdonan los atrasos que adeuden los censatarios, ya procedan de que no se hayan reclamado en los últimos cinco años, ya de ser los censos desconocidos o dudosos, o ya de cualquier otra causa, con tal de que se confiesen deudores de los capitales o sus réditos», vía por la que se intentarían mantener como censos incluso rentas señoriales de otro carácter: «censos

(43) En la misma recopilación citada, II, págs. 257-258 y 369-376.

(44) Son éstas ya disposiciones que, por haber regido sustancialmente todo el proceso ulterior, no faltan naturalmente en manuales de desamortización, una relación, aunque no exhaustiva, de los cuales puede encontrarse en Francisco Simón Segura, *La desamortización española del siglo XIX*, Madrid, 1973, págs. 54-55.

dudosos», cuya confesión se exige a cambio de la condonación de unos atrasos no menos dudosos con ello.

Con algún desarrollo de la materia por otras disposiciones que, en un primer momento todavía liberal, parecen favorecer la redención estricta de los censos, pero que, posteriormente, sin lugar a dudas la dificultan (así situándose el tipo de capitalización en 1866 en el muy oneroso del 100 por 3), y con nuevos plazos, éste será el régimen generalmente aplicado en aquel terreno de la redención en el que más propiamente incidía la desamortización (45).

Y nos interesa sobre todo, en este capítulo, más que la aplicación efectiva de tal procedimiento, la acogida en su régimen de un principio de redimibilidad, sin excepción, de los censos. Ciertamente es —y no conviene desde luego olvidarlo— que tal régimen y tal principio tienen un campo restringido de vigencia; tienen un supuesto bien delimitado: no la cuestión general de la redimibilidad de los censos, sino el problema concreto de su redención cuando deviene censalista el Estado. En términos más generales, salvado por la legislación antiseñorial, el censo no era desde luego un título precario sujeto a liquidación.

Pero, junto a ello, tampoco habrán de desdeñarse otras implicaciones: es el Estado el que concibe y asume un proyecto de redención sin excepciones de los censos de que es titular; es el Estado el que viene a tratar así al censatario, a todo censatario, como potencial propietario de la tierra al reconocerle la facultad de liberarla de sus rentas; es verdad que no concibe tal propiedad, sino con dichas cargas, pero el hecho es que la concibe, por los propios imperativos de la desamortización, en cabeza del censatario; y cierto es que concibe dicha condición en

(45) Abundan, en los manuales de desamortización, en los meses más liberales de 1855 y 1856, disposiciones sobre redención de censos, apareciendo ya en mucha menor medida, pero con dicha tendencia restrictiva en los años ulteriores, aunque en ello no se hayan interesado exposiciones más generales como las citadas de Simón Segura y de Tomás Valiente, ni antologías de normas como la de Teodoro Martín, *La desamortización. Textos político-jurídicos*, Madrid, 1973, ni tampoco, en lo que alcanzan mis noticias, se haya tratado el tema en monografías fuera del caso gallego. Pero véase la cuestión justamente situada en Mariano Peset, *Derecho y propiedad en la España liberal*, págs. 476-478, en *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5, 6, 1976-1977, págs. 436-507, anunciando además investigaciones sobre los censos en la Valencia del XIX.

forma transitoria, sometida a unos plazos de caducidad, pero el hecho sigue siendo que la concibe. La misma administración del Estado podrá ir conformando la idea o evidencia social de que el censatario, y no el censalista, es virtualmente el propietario de la tierra; el dominio útil, y no el dominio directo, la propiedad, aun siempre, o desde que no se han abolido los censos en la legislación antiseñorial, con la carga del crédito rediticio al que viene entonces a reducirse el derecho del censalista; y tal idea podrá irse incluso aplicando a efectos tan importantes como los registrales o los fiscales.

Pero no se piense tampoco que por todo ello podría ampliarse el supuesto o el alcance de la redención desamortizadora; ésta será una opción que de hecho no alcanzará siquiera a la generalidad de los censatarios de las tierras desamortizadas. Piénsese, por ejemplo, en un caso ya conocido y nada excepcional (46): el de los intermediarios; si se desamortizan los derechos de un dominio que tenía acensuada sus tierras a intermediarios, éstos, censatarios ahora provisionalmente del Estado, podrán redimir, sin la competencia de una subasta, en el plazo asignado, y éstos, en todo caso, serán aquellos potenciales propietarios de que hablábamos; mas sus propios censatarios no tienen, por su parte, opción alguna equivalente: la excepción de su caso en la legislación antiseñorial se une aquí a su exclusión de tal posibilidad por no ser censatarios directos del dominio desamortizado; aparte esto siempre, desde luego, de sus presumiblemente menores disponibilidades económicas para una operación del género. Su censo no ha dejado de ser en momento alguno, pese a la desamortización como pese también a la abolición del señorío, irredimible.

Está además por ver qué uso efectivo se hizo de estas posibilidades parciales y temporales de redención; aparte

(46) Podían ponerse otros de diverso carácter; por ejemplo, no era raro que las cargas censuales, por razones de sucesión familiar o de organización corporativa local, fueran colectivas, con la consiguiente dificultad de asignación a una tierra para su redención individualizada por esta vía o, en su caso, de su redención colectiva por éste u otro expediente. Pero no es ésta ocasión de analizar la casuística del tema, sino de exponer sus coordenadas más generales.

la eventual preocupación social de los legisladores sinceramente vertida en su establecimiento, no está claro si quiera a qué intereses podía responder su promoción; mayor sería por supuesto el de los intermediarios que el de los censatarios que realmente pagaban las rentas, pero pudiera también ocurrir que, en esta almoneda, les conviniera económicamente más a dichos intermediarios prescindir de la redención concurriendo a la ulterior subasta, así como al Estado capitalizar estas rentas mejor por el tipo de redención que por el albur de la subasta; tal vez las renovaciones de plazos para la redención apuntasen en este sentido. Mas poco cabe salvo conjeturas en un tema realmente por investigar (47). Y no se olvide además que, siendo aquellos censos de los intermediarios más fácilmente clasificables ahora como reservativos, se les podría quizá redimir de una forma más expedita, ya frente al Estado, ya frente al particular que hubiera pujado por encima de lo que estuviera dispuesto a pagar el intermediario. Todo ello fue una mina de pleitos cuya jurisprudencia está también por estudiar (48).

Mas cualquiera que fuere el planteamiento y la suerte de todos estos contenciosos, el censo propiamente agrario, tras en algunos casos —no en todos— una suspensión de pocos meses, seguía siendo perfectamente irredimible. Aún con tales suspensiones cuya real incidencia ignoramos, el régimen de los censos agrarios parece en buena parte correr como un gadiana bajo la revolución: tanto bajo la abolición del señorío como bajo la desamortización. Pero el planteamiento, desde la misma revolución iusliberal, de la necesidad para el nuevo sistema de codificar el derecho civil, no pudiendo evitar el enfrentamiento con esta mate-

(47) Aunque ya se ha abordado para el caso mejor estudiado de Galicia: véase M.^a del Carmen Quintáns, *El dominio de San Martín Pinario ante la desamortización. Rentas de la abadía*, Santiago de Compostela, 1972, anunciándose ulteriores investigaciones que inciden en este punto en las referidas *I Jornadas de metodología* de Santiago de Compostela. Pero en conjunto puede ciertamente decirse que éste de la redención de los censos, junto quizá al tema de las desvinculaciones de los dominios laicos, es uno de los apartados más descuidados en la historiografía bien nutrida de la desamortización.

(48) Ya se ha introducido en ello, aunque no respecto a nuestras concretas cuestiones. F. Tomás y Valiente, subrayando su importancia; véanse sus propias referencias en *Recientes investigaciones*, cit., pág. 109.

ria de censos, ya nos podrá hacer ver que las cosas no resultaban desde luego tan sencillas.

Los censos entre código y fuero

Las constituciones —tanto la de 1812 como, y éstas más destacadamente, las de 1837 y 1845— ordenaban la codificación; la ley antiseñorial de 3 de mayo de 1823 no dejaba de remitirse a ella: «mientras se arreglan de una manera uniforme estos contratos en el Código Civil» procedía a la fijación de un tipo máximo en el laudemio enfiteútico, de «los enfiteusis de señorío que hayan de subsistir» según la propia ley. En dicho proyecto de código (o en la idea más concreta de un código civil como el francés de 1804, ya en expansión, más o menos adaptado, por diversos países), constituyendo el mismo un cuerpo normativo de carácter sistemático bajo principios de propiedad privada y libre contratación, podían justamente centrarse expectativas de superación de estas secuelas «señoriales» de una todavía irregular legislación antiseñorial (49).

A mediados de setiembre de 1836, esto es, cuando el sistema constitucional apenas lleva un mes restablecido y cuando las leyes de abolición de señoríos todavía no se encuentran formalmente de nuevo en vigor (a su restablecimiento, como ya sabemos, sólo se procederá en febrero de 1837, con el compromiso ya de elaborarse una nueva ley aún más moderada que sería la de 26 de agosto del mismo año), en esta fecha ya se cuenta con el primer proyecto oficial completo de código civil español. En sus trabajos preparatorios no había dejado de subrayarse que el régimen actual de redención de censos —y en concreto aquella disposición de 1805 cuya vigencia había respetado la misma ley de 1823— era abiertamente «contrario al derecho de propiedad», propugnándose en consecuencia el establecimiento de un más inequívoco y ya general principio de redimibilidad; mas, finalmente, el proyecto de código negará de nuevo la condición de redimibles a «los

(49) Sobre ello, puede verse B. Clavero, «La idea de código en la Ilustración jurídica», en *Historia. Instituciones. Documentos*, 6, 1979, págs. 49-88.

foros de Galicia y Asturias y las enfiteusis de la Corona de Aragón» mediante nueva fórmula provisional: «continuarán en el mismo estado que tienen ahora hasta que se arreglen por una ley especial» (50).

Ya se intentaba sortear la consecuencia del código en el tema, pero el mismo expediente de remisión a una ley especial no dejaba justamente de reconocer que los censos agrarios irredimibles no tenían cabida en el sistema iusliberal de un código civil. Por su parte, y en la misma línea, ya sabemos que la ley antiseñorial de 1837 evitaba cualquier referencia al código. Y alegándose por el Gobierno ante las Cortes que había de revisarse el proyecto para ser adaptado a la nueva constitución de 1837 —más bien una excusa— y —lo que ya es más sustantivo— «para efectuar el tránsito de la legislación particular de ciertas provincias al uniforme que debe introducirse sin herir intereses y derechos adquiridos» (esto es, en nuestro caso, intereses y «derechos» de las rentas censuales características de algunas regiones), el código no se promulga (51); su proyecto fue de momento abandonado por la misma reacción moderada que ya conocemos de estos mismos años.

En los años inmediatos, la cuestión no deja de suscitarse, y sobre todo mediante propuestas de ley especial por los diputados más liberales de las mismas regiones de censo (52), pero, entre tantos proyectos frustrados, aquí nos interesa especialmente la suerte del compromiso que en nuestra materia supone el mandato constitucional de codificación, de un compromiso que ya podremos ver, en éste —y más todavía— en un capítulo ulterior, hasta qué punto era entonces potencialmente decisivo.

El siguiente proyecto oficial completo de código civil, de 1851, no elude tal compromiso: «Todos los censos —se proclamará de nuevo en él inequívocamente— son redimibles, aunque se pacte lo contrario»; y aún más: «no podrán constituirse en adelante otros censos que el consigna-

(50) Véase en Pablo Salvador y Coderch, «El proyecto de Código civil de 1851 y el Derecho civil catalán», págs. 80-81, en *Revista Jurídica de Cataluña*, 1980, I, págs. 49-98, y 2, págs. 313-372.

(51) P. Salvador, *El proyecto de Código*, cit., pág. 82.

(52) P. Salvador, *El proyecto de Código*, cit., págs. 83-84 y 90-98.

tivo y reservativo», es decir, como subrayará el comentarista más autorizado y principal autor de este proyecto (53), «el enfitéutico queda prohibido». Y para la cuestión fundamental de los censos agrarios existentes se dispone que los perpetuos podrán redimirse capitalizándose su renta al 100 por 3, de lo cual, considerándose expresamente como censo no perpetuo —su duración se intenta fijar ahora en sesenta años—, queda de forma explícita exceptuada la institución de las rabassas (54).

García Goyena, que es el aludido comentarista y autor, no dejará de abundar en todo ello a lo largo de unas glosas que ya suelen referirse a la materia en pretérito como si el código —cosa que, de nuevo, no ocurrirá— estuviera ya vigente. Aquella disposición de 1805 —considerará— no afectó sustancialmente a la irredimibilidad de los censos agrarios: «su verdadero objeto fue fiscal y no económico»; tras ella y hasta el código, la misma situación pudo mantenerse en esta importante cuestión: «los censos irredimibles eran los más gravosos y funestos bajo el aspecto económico y tenían algo de inicuo bajo el aspecto moral; la irredimibilidad perpetua es odiosa». Ya no hay, así, razón para las excepciones mantenidas desde 1805: «todas las prestaciones y gravámenes en frutos o dinero deben quedar sujetas a redención», salvo, como ya sabemos, las rabassas: «se ha conservado esta especie de contrato por ser frecuente y de grande utilidad en Cataluña». Por otra parte, apunta finalmente algo de interés respecto a la nueva redimibilidad de los foros y que en todo caso sería cierto con un tipo de capitalización del 100 por 3: «No podrán plañirse de esto con justicia los señores directos

(53) Florencio García Goyena, *Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español*, Madrid, 1852 (hay dos diversas reediciones, ambas de 1974); a los censos se dedican los artículos 1546 a 1563, en los que se encuentran igualmente dichos comentarios. Ahora nos referimos a los arts. 1547 y 1548.

(54) F. García Goyena, *Concordancias*, cit., arts. 1548, 1560 y 1563. Y confróntese P. Salvador, *El proyecto de Código*, cit., pág. 86, que en este punto, y frente a lo que acostumbra, se deja llevar por la demagogia foralista que luego veremos: no se comprende, en otro caso, que hable, ante la redimibilidad de las otras enfiteusis, de «expropiación» de unos censuistas catalanes sacrificados a un «derecho castellano»; en general, el tema cardinal de la redención aparece bastante desdibujado en este muy informado estudio desde que se le otorga, ya a la conocida disposición de 1805, un carácter general que, como hemos visto, no le corresponde.

cuando la pensión o canon de los foros es generalmente mucho más alto (que en otros casos)...: de consiguiente, será mucho mayor el capital que dichos señores reciban al tiempo de la redención» (55).

Pero —conviene advertir— «señores directos» es término del comentario, no del código; a efectos expresivos García Goyena puede hablar de «dueño directo» o «señor», pero el código ya no conoce significativamente estas expresiones; en sus términos normativos, tales señores son tan sólo «los perceptores de las pensiones o gravámenes», mientras que los censatarios son justamente, para él, «los terratenientes» (56). La termonología no es ciertamente precisa, pero algo bien importante despunta en ella con claridad: para el código, la propiedad habría de recaer definitivamente en el censatario, quedando tan sólo alguna especie de crédito hipotecario a favor del censalista. Y la propiedad recae en el censatario con el alcance que esto puede ya tener en un orden iusliberal codificado, liberándose al tiempo al censatario-propietario de algo a lo que podía expresivamente aludirse como «la comitiva de los censos»: los «gravámenes odiosos» que, por su condición señorial, venían históricamente comprendidos en los censos agrarios (57); aquellos privilegios o aquel «fuero» del censalista frente al que vimos pronunciarse a la ley anti-señorial de 1823 y guardar discreto silencio a la de 1837. Y las constituciones tampoco dejaban de disponer la abolición con carácter general de tal tipo de «fueros».

Así, por ejemplo, y para referirnos a un punto de indudable significación no resuelto por dicha legislación antiseñorial que ciertamente hiciera ya desaparecer buena parte de aquella «comitiva», en materia de registro dicho proyecto de código no dejaba de establecer que «se observará respecto de los censos las disposiciones contenidas» en el título correspondiente del mismo código, esto es, un régi-

(55) F. García Goyena, *Concordancias*, cit., en un «apéndice» sobre el tema de los foros que añade a los citados artículos de censos (III, págs. 509-512).

(56) Especialmente puede apreciarse este contraste terminológico entre texto o norma y comentario en el caso del importante artículo 1563, que es el que se dedica a los censos enfitéuticos existentes.

(57) Estas expresiones pueden encontrarse en el citado «apéndice» que dedica García Goyena a los foros: «comitiva de los foros» es su exacta expresión.

men de registro público que habría de erradicar definitivamente la práctica tradicional de ejercicio por el propio «señor» censualista de esta operación fundamental para la determinación de los respectivos derechos: «el legislador —se resaltarán en el comentario— debe procurar que la propiedad no esté incierta, que el fraude y la clandestinidad no vengán a frustrar los contratos... por esta razón se ha extendido ya generalmente el principio de publicidad a todos los actos traslativos de la propiedad territorial... y a todas las cargas y restricciones que limitan el valor o la circulación de la misma propiedad» (58). Lo que antes era derecho señorial —la capbrevación de que ya hablamos—, con el código será fraude contractual: y así puede ir transformándose la institución de los censos agrarios, aun irredimibles, en la misma línea antifeudal de la revolución iusliberal. En nuestro ejemplo, aunque el código como tal de nuevo volvió a frustrarse, entre otros capítulos suyos, el del registro público no dejó de establecerse mediante disposiciones especiales a los pocos años, desde 1855 (59).

Consecuentemente con el carácter sistemático de un código, nuestro proyecto podía expresamente significar que, frente a sus nuevas regulaciones, no conservará ningún valor todo el derecho que históricamente podía venir rigiendo en su campo, derecho desde luego ya muy desplazado por toda la legislación de la revolución iusliberal y ahora, con esto, definitivamente desahuciado: «Quedan derogados todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores a la promulgación de este Código en todas las materias que son objeto del mismo». «La existencia de fueros y

(58) La remisión en el artículo 1554: el comentario de García Goyena en la introducción del título «Del registro público»: libro III, título XX. El «principio de publicidad» en sí mismo es ya, lógicamente, ulterior al de competencia pública del registro que aquí propiamente nos interesa; y véase el texto de referencia de la nota 28 anterior.

(59) Véase P. Salvador, *El proyecto de Código*, cit., págs. 360-366, con información sobre propuestas frustradas en estos años de leyes especiales sobre materia de censos, generalmente también en la línea del proyecto de código de 1851. Respecto al registro, desde 1855 el dominio útil podría ser ya objeto de inscripción principal, equivalente a la del derecho de propiedad de tierras no censuadas, y esta modificación iría implícita en los traslados que ahora se admiten de los asientos de registros anteriores al nuevo de la propiedad; pero ésta es cuestión aún por investigar; introduce en sus antecedentes, incluyendo el tema del censo, M. Peset, «Los orígenes del registro de la propiedad en España», en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 527, 1978, págs. 695-716.

legislaciones especiales, usos y costumbres varias y complicadas en determinados territorios de la Monarquía que en otros tiempos formaron estados independientes —alegará por su parte un gobierno bien poco liberal para suspender la promulgación del proyecto—... aumenta considerablemente las dificultades y obstáculos que siempre ofrece la publicación y ejecución de todo Código general» (60).

La diversidad regional en la materia era desde luego un problema real: ya lo sabemos sobradamente y ya consideramos hasta qué punto ello podría ser una circunstancia de peso en nuestra particular revolución, mas aquí su alegación sólo era una excusa política para la defensa, entre otros intereses, de la renta censual. El código vuelve a frustrarse; y el código vuelve así a frustrarse por una reacción que va encontrando el mejor terreno para la defensa de sus intereses en el problema de la diversidad regional, en los términos de dicha contradicción entre «fueros» particulares y «código» general. El código, en consecuencia con sus principios iusliberales, prohibía la constitución de censos enfitéuticos y, entre los existentes, disponía, aun con una capitalización bastante gravosa, la redimibilidad de los foros y, aún admitiendo las rabassas de régimen irredimible, no dejaba de introducir modificaciones que habrían de afectar al censualista; las regiones de censo enfitéutico podrán reaccionar frente al código; las regiones, esto es, los intereses sociales rentistas de Cataluña o de Galicia, pero unos intereses sociales que conseguirán presentarse como parte sustantiva de un derecho regional amenazado por el código civil (61).

(60) P. Salvador, *El proyecto de Código*, cit., 313-334, con nueva información del máximo interés sobre la consulta que al tiempo se abrió. De esta misma fecha de 1851 data la fundación del Instituto Agrícola de San Isidro, que representaría en lo sucesivo, y con notable eficacia, los intereses o privilegios de la renta censual.

(61) P. Salvador, *El proyecto de Código*, cit., págs. 319-334, aunque centrado en Cataluña, no deja de advertir que, en puntos como el de la defensa del censo enfitéutico, coinciden sus representaciones con las de Galicia, Asturias y —también— de instituciones eclesiásticas, en general, subrayando igualmente dicha «extrapolación» de intereses sociales a regionales y consiguientes «primeras críticas globales a la idea de codificación». Puede confrontarse, pues imperan estas otras composiciones, Luis Puig Ferriol y Encarna Roca Trías, *Fundamentos del Derecho civil de Cataluña*, I, Barcelona.

Aunque anteriormente, desde el siglo XVIII, el término ya se ha utilizado en forma esporádica, la misma idea de *derecho foral* se forma prácticamente en esta época y en tales coordenadas sociales; la idea, esto es, de un derecho regional de formación histórica que ha de subsistir en cuanto tal sin revisión ni revalidación contemporánea: la idea, por ello, más apropiada para la defensa de unas instituciones que han de mantenerse frente a leyes parlamentarias o a códigos liberales (62). Y «derecho foral» será entonces en Galicia, casi exclusivamente, la institución censal de los foros; o en Cataluña, primordialmente, junto a otros capítulos en esta época también de carácter agrario, sus respectivas instituciones enfitéuticas. Al menos en estos casos que principalmente aquí nos conciernen (el supuesto vasco-navarro presenta entonces desde luego otras determinaciones políticas de más clara resistencia señorial a la que ahora también aludiremos), es el interés social de la renta territorial de procedencia señorial el que abiertamente informa esta especie «foral» —no tratamos de otra— de resistencia regional.

Hasta ahora las coordenadas políticas de las principales tendencias iusliberales podían estar relativamente claras en lo que aquí nos interesa: la tendencia con menos reservas, y en todos los órdenes, liberal para la que el código civil habría de ser justamente un elemento irrenunciable, y aquella otra que, resistiéndose a algunas de las consecuencias liberales de la revolución antiseñorial, pretendía limitar el alcance del código, o incluso prescindir de él, prefiriendo una forma más pausada, y políticamente más con-

1978, págs. 63-64: la afirmación más generalizada de que el código de 1851 se frustró por oposición foralista «es cierta sólo en parte» pues «en determinadas materias se acogen instituciones forales, como ocurría en los censos» y porque no se había presentado oposición análoga ante leyes generales anteriores; si ahora «fue posible evitar la uniformización del Derecho civil... fue porque se había producido un hecho cultural que propiciaría la exaltación de los valores populares: nos referimos a la *Renaixença*». Si aquella tradicional explicación de simple «oposición foralista» velaba ciertamente la entidad social del tema, ahora a esto mismo se añaden suplementarias desorientaciones. Luego volveremos a ello.

(62) Sobre esto, pues son otras las ideas que suelen representarse en este capítulo, puede verse B. Clavero, «Historia jurídica y código político: los derechos forales y la Constitución», en *Anuario de Historia del Derecho Español*, 50, 1980, donde se confrontan más detenidamente dichas otras composiciones.

trolable, de adaptación de las instituciones al nuevo sistema. Ahora el mismo triunfo de esta segunda tendencia —evidente desde 1843 y bien ratificado en nuestro caso en 1851— puede venir a crear la referida confusión: las conocidas ideas de legitimación, como ya contractuales o no señoriales —sin necesidad de nueva ley o código—, de los censos existentes encuentran ahora su mejor medio en dicho motivo «foralista» que hasta el momento había sido justamente patrimonio de una tendencia radicalmente contraria al mismo sistema constitucional (63); ahora —ni siquiera los convenios de liquidación de la primera guerra carlista y disposiciones consiguientes habían supuesto esta novedad— dicho argumento «foral» entra plenamente en la tendencia moderada del campo iusliberal: y con él, no ya la defensa del orden prerrevolucionario, pero sí la de nuestras instituciones agrarias de procedencia señorial.

El *derecho foral* —y con él nuestras instituciones agrarias— no tendrá propiamente reconocimiento normativo, como habremos de ver, hasta época posterior, pero en estos años no dejará de alcanzar otros reconocimientos oficiales que conviene no despreciar. Así, principalmente, el «derecho foral» es ya parte de los estudios de licenciatura jurídica desde 1857, no faltando en él obviamente nuestra materia de los censos; los juristas se formarán con una disciplina básica de «Derecho civil, común y foral»: como «derecho común», los principios y el sistema civil liberales; como «derecho foral», instituciones contrarias —foros, rabassas...— sin otra justificación de principio que la de su simple existencia en determinadas regio-

(63) No afectándonos a nuestros actuales efectos el arraigo popular de esta otra reacción foral, no inmediatamente conectada por lo demás con la carlista que en un primer momento la capitalizaría, identificándose ambas en un mismo rechazo del tipo de revolución iusliberal que aquí se estaba imponiendo; véase E. Fernández de Pinedo, *Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, 1100-1850*, Madrid, 1974, págs. 455-478; Pablo Fernández Albaladejo, *La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. Cambio económico e historia*, Madrid, 1975, págs. 367-372; J. del Moral Ruiz, «Carlismo y rebelión rural en España (1833-1840): algunas notas aclaratorias e hipótesis de trabajo», págs. 230-243, en *Agricultura y Sociedad*, II, 1979, págs. 207-250. Pareciendo además que, aún más débilmente desde luego, la confluencia entre fuerismo y iusliberalismo también se inicia a mediados de siglo en el propio País Vasco; véase Javier Corcuera Atienza, *Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, 1876-1904*, Madrid, 1979, págs. 38-58.

nes (64). Los juristas que ya se forman en la nueva Universidad pueden así asimilar, junto al orden iusliberal, la existencia de instituciones de procedencia señorial: y ello, como todavía habrá de verse, tendrá desde luego su importancia.

El código, ciertamente, llegará, mas ya veremos hasta qué punto incluso entonces las rentas censales, ya beneficiadas por su aplazamiento, podrán finalmente aprovechar los mismos recursos anunciados con estos proyectos; tanto el de la ley especial del de 1836 como el del derecho foral provocado por el de 1851; ya tendremos ocasión de comprobar ulteriormente la misma significación final de esta especie de frustraciones. Tras ellas, quedamos de nuevo en la misma situación indeterminada —interesadamente indeterminada para las rentas censales— de los capítulos anteriores: y los censos agrarios, en sustancia, persisten todavía, pese a la revolución —pese a las leyes antiseñoriales y desamortizadoras, pese al mandato constitucional de codificación...—, en su condición irredimible.

En los capítulos siguientes habremos de analizar cómo esta situación puede, finalmente, estabilizarse incluso con un código civil tras diversas alternativas que no dejarían de presentarse entre 1868 y 1873, y que plantearían una nueva legislación antiseñorial que, de haberse impuesto, habría indudablemente sentado las bases para un código bien diverso; así como habremos, conclusivamente, de abordar la cuestión esencial subyacente a toda la exposición: qué alcance social ha de tener, en la sociedad capitalista contemporánea, esta existencia de rentas agrarias que no responderán a su propio orden, confrontándose a este propósito las explicaciones que hasta hoy haré podido ofrecerse de este fenómeno.

(64) Confróntese F. Tomás y Valiente, *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, 1979, pág. 581, apartado escuálido por cuanto que está realmente por investigar este punto de la entidad sustantiva en esta primera fase del derecho foral, cuyo estudio por lo demás tan siquiera suele abordarse por imperar una imagen de continuidad —indiferente a la revolución iusliberal— de esta especie de derechos regionales; el mismo Tomás y Valiente, que en este tratado destaca justamente la trascendencia jurídica de dicha revolución, no plantea luego su incidencia en este capítulo de «derechos forales», cuya misma entidad, con todo, queda bastante incierta.

RÉSUMÉ

Les «censos agrarios» ou emphytéoses, comme rentes qui ne dérivent pas d'un inequivoque droit de propriété, constituent notoirement une institution bien caractéristique de quelques régions espagnoles jusqu'à temps bien récents, une institution qui, après la révolution libérale du siècle dernier, a continué à garder une certaine connection avec le régime seigneurial alors abrogé. En considérant que le problème que pose une telle présence contemporaine de cette institution agraire doit se centrer précisément dans la dite révolution libérale, cet article se dedie principalement à la reconstruction de son histoire entre la fin du XVIIIème siècle et celle du XIXème.

Dans cette première partie, en plus de se profiler comme point de départ la situation institutionnelle du «censo agrario» avant la révolution libérale, on analyse l'incidence particularisée dans cette matière de la législation abolitive du régime seigneurial, des mesures pris par la «Desamortización» et des premiers projets de codification, en constatant déjà que, sous une apparence effective de continuité, elles sont etés importantes les modifications que par la dite révolution les «censos» ont du traverser.

SUMMARY

The agrarian «censos», rents which do not derive from an unequivocal property right, clearly constitute a most peculiar institution in some Spanish regions until very recent times, an institution that, after the liberal revolution of the past century, continues keeping a certain connexion with the «señorial» regime then abolished. In the understanding that the problem that presents such contemporary presence of this agrarian institution must be precisely centered in this liberal revolution, this article devotes itself primarily to the reconstruction of its history between the end of the XVIIIth Century and a similar period in the XIXth.

In this first part, in addition to taking as a starting point the institutional situation of the agrarian «censo» before the liberal revolution, it is analysed particularly the incidence in this matter of the abolitionist legislation of the «señorial» regime, of the measures adopted in the «Desamortización» and of the first codifying projects, noting already, under an effective appearance of continuity, the importance of the modifications that due to the revolution the «censos» had to suffer.